Comodoro Rivadavia, de diciembre de 2012.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "**Juez A cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral N° 1 de la Circunscripción Judicial con asiento de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, en autos: "O. C. W. c/ E., M. F. s/ sumario (daños y perjuicios)" Expte. N° 806/2012 s/ INCIDENTE (art. 31 del C.P.C.Ch.)", Expte. N° 622/12**, venidos del Juzgado de Primera Instancia Laboral N° 1 (Expte N° 807/2012).

I.- Que a fs. 1 y vta., el titular del Juzgado Civil y Comercial N° 1, Dr. José Leonardh, se excusa de entender en los autos caratulados: "O. C. W. c/ E., M. F. s/ Sumario (Daños y Perjuicios)" Expte. N° 806/2012, con motivo de encontrarse comprendido en la causal contenida en el inciso 4° del art. 17 del CPr., y también con fundamento en el art. 30 del mismo cuerpo normativo.

Funda su excusación en el entendimiento de ser acreedor del Estado Provincial en virtud del incumplimiento de parte del Ejecutivo provincial al acuerdo celebrado y homologado en los autos caratulados "Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut c/Provincia del Chubut s/Acción de Amparo" Expte. N° 489/2008, cuyo pago debió verificarse al 20/08/2012.

A fs. 3, en idénticos términos se excusa de entender el titular del Juzgado Civil y Comercial N° 2, Dr. Alberto Gustavo Sanca; a fs. 4 se excusa el titular del Juzgado de Ejecución N° 1, Dr. Gustavo L. H. Toquier, invocando las mismas causales que los magistrados premencionados y a fs. 6, se excusa el titular del Juzgado de Ejecución N° 2, Dr. Eduardo

Oscar Rolinho, con fundamento en el art. 17 inc. 4° y 30 del CPr.

Remitidas las actuaciones al Juzgado Laboral N°1, su titular a fs. 9/10, cuestiona las inhibiciones de los titulares de ambos Juzgados de Ejecución y de ambos Juzgados Civiles y Comerciales. Afirma que la causal esgrimida no resulta ajustada por cuanto ser acreedor del estado no puede entenderse de manera de atribuirle un alcance tan radical y absoluto que haga poco menos que imposible para un magistrado el ejercicio de su función como tal y el de los derechos en juicio cuando en éste sea parte el Estado y no surja de manera clara la existencia de un interés del juez derivado de la semejanza del asunto en debate.

II.- De las presentes actuaciones surge que los jueces inhibidos entienden que resultan acreedores del Estado Provincial ante el incumplimiento de éste a las sentencias dictadas en el trámite judicial antes detallado, encuadrando esta situación en las causales del art. 17 inc. 4° y 30 del CPr.

Reiteradamente hemos señalado que "… los institutos de recusación y excusación se fundan en la necesaria imparcialidad que los magistrados deben guardar para conocer y decidir las causas… No obstante, casi unívocamente, en criterio del que participa este Superior Tribual de Justicia, doctrina y jurisprudencia consideran, que implicando un desplazamiento anormal de la competencia, siendo inherente ésta a la garantía del juez natural, las causales son de enumeración taxativa y deben ser interpretadas restrictivamente y con mesura dada su trascendencia y gravedad (Conf. CS Fallos 310:2845, ST La Pampa –24/11/94- "Ortiz…"; ST Misiones 18/12/95- "Barreyro…"; TS Neuquén 4/3/93- "Massei…";

STCH SI Nro. 72/SCA/99, en autos: "T., M. C/ F. S. Y/U Otros s/ Legajo de Copias", para ser elevado a la Excma. Cámara de Apelaciones" Expte. nro. 17.406-T-2000).

Cabe señalar que recientemente mediante ACUERDO PLENARIO N° 4071/12, el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia, refiriéndose a las excusaciones como la traída ahora a examen de esta Sala, dejó sentado el criterio de ese Cuerpo, en ambas salas, Civil y Penal, y sostuvo que "…Que se observa, desde el aporte que motiva la presente, que la causal de excusación que se ha blandido no constituye una situación siquiera imaginada por el legislador, que se ha esmerado en estipular salvedades en pro del mantenimiento de la jurisdicción en casos en que la situación particular de los Magistrados se vincule con ciertas instituciones oficiales…"; tal el caso del art. 17 inciso 4) del Código Procesal Civil y Comercial, y su par, el art. 77 inc. 5) del Código Procesal Penal. Que –se ha dicho- la misión del juez es difícil y augusta: resolver los conflictos que se dan en el cuerpo social para cumplir el fin eminente de la paz, lo que conlleva al ejercicio virtuoso de su labor que ha de estar, por sobre todas las cosas, presidida por la ética, desde que asume un predicamento de insondable envergadura y ejemplaridad que impacta en la ciudadanía con una potencia superlativa.

Y, "Que en particular se ha de considerar –y por añadidura emitir un claro mensaje- que el reparo que en el fuero interno pueda causar el motivo de excusación que se denuncia, de interés patrimonial a la postre, no puede ni debe conspirar en desmedro del justiciable, afectando su derecho a tener

un acceso fácil y rápido a la jurisdicción. Por ello, sin perjuicio de las resoluciones que se adopten en cada uno de los Expedientes en especial, este Superior Tribunal de Justicia, custodio y garante del recto ejercicio del Poder Judicial, no puede menos que instar a los señores Jueces de todos los fueros e instancias, a razonar en sentido que, al abordar la tópica de inhibiciones por la causa enunciada, prevean y eviten constituirse en sujetos pasivos de la queja prevista por el art. 179 inc. 1.5 de la Constitución Provincial.

Concordante con los fundamentos transcriptos, la doctrina y jurisprudencia sostiene que para la procedencia de la recusación de un magistrado por la causal prevista en el inc. 4 del art. 17 del código de rito – Haber sido el juez acreedor o deudor de una de las partes, excepto respecto a bancos oficiales –, ha afirmado que "La existencia de un pleito pendiente –una acción de daños y perjuicios– entre el Sr. juez y el GCBA no permite, por sí sola, presumir nítidas razones que hagan dudar acerca de su imparcialidad, a partir de la prudente evaluación de los elementos constitutivos del impedimento denunciado, conjugados con las particularidades de la causa y la concreta finalidad que inspira al instituto, de modo que su razón de ser no quede tergiversada, en tanto su aplicación debe reservarse para casos excepcionales. (Voto del Sr. Juez José O. Casás en "VALOT S.A. c/ GCBA s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad". (Expte. N° 6942/09) - TSJ DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - 17/06/2010).

Compartiendo los criterios que fueron transcriptos, en el entendimiento de que la excusación masiva de los titulares de los Juzgados de Ejecución y

Civiles y Comerciales de esta Circunscripción, vulneran las normas supremas de la Nación y de la Provincia, comprometiéndose las garantías del Juez Natural, del debido proceso y el adecuado servicio de justicia, por la dilación severa de los procesos con compromiso de los intereses en conflicto y el apartamiento de los jueces de la Constitución, corresponde rechazar las inhibiciones de fs. 1 y vta., 3, 4 y 6.

Ello así, toda vez que "La recusación fundada en la causal de calidad de acreedor -que se les atribuye a los titulares del Superior Tribunal- ha experimentado una modificación del modelo nacional, haciéndose extensiva la excepción que contempla no sólo a los bancos oficiales, sino también "a las instituciones del mismo carácter", de lo cual debe seguirse que aún en casos de mediar acreencias, deudas o finanzas por parte del juez interviniente, el mismo no es recusable si alguna de las partes son instituciones oficiales, de las cuales el Estado resulta ser la persona jurídica "oficial" por excelencia" (STJ de Río Negro, AU. 65/95 "BRINGE, MARIA NOEMI s/ MANDAMUS" (9-5-1995), "MATURANA, VIDELA, AZPEITIA, RODRIGUEZ, MANTARAS. S. T. J. DE RIO NEGRO AU/75", "SANCHEZ, JOSE ANTONIO s/ MANDAMUS" (15-6-1995), MATURANA, RODRIGUEZ, DUHAGON, PRAVATO. Citar: elDial.com - AX13AD).

En consecuencia, debe rechazarse la excusación del Dr. José Leonardh, titular del Juzgado de Primera Instancia de Civil y Comercial N° 1.

Por ello, la **Sala B** de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en Comodoro Rivadavia,

R E S U E L V E:

1)Hacer lugar al incidente y declarar la competencia del Juzgado Civil y Comercial N° 1 para actuar en la causa "O. C. W. c/ E., M. F. s/ Sumario (Daños y Perjuicios)" Expte. N° 806/2012, actualmente en trámite por ante el Juzgado Laboral N° 1.-

2)Por Secretaría, remítase el presente, al Juzgado Laboral N°1 a los fines del art. 11 del C.P.C.Ch., informándole que deberá remitir la causa individualizada en el punto 1 de la presente al Juzgado declarado competente, y con copia certificada, comuníquese la resolución a los Juzgados Civiles y de Ejecución.

3)Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Juez de Cámara, Dra. Nélida Susana Melero y concordar en la solución del caso (Ley V N° 17 del DJPCh).